

C.A. de Santiago

Santiago, quince de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

En este proceso RIT N° 40-2020, RUC N° 1601113550-5, seguido ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de veintiséis de abril del año en curso se condenó a Francisco Javier Valdés Vásquez como autor del delito reiterado de abuso sexual de menor de 14 años, en grado consumado, a la pena única de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias del grado y demás especiales atendida la naturaleza del ilícito que motiva la condena.

En contra de este fallo la defensa de Valdés Vásquez ha deducido recurso de nulidad fundado en la causal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal.

Con fecha 29 de junio último se procedió a la vista de la causa, oportunidad en la que alegaron tanto la parte recurrente como el Ministerio Público y la querellante, fijándose para el día de hoy la lectura de la presente sentencia.

Considerando:

Primero: Que el recurso de nulidad se sustenta en la causal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación a la letra c) del artículo 342 y al artículo 297, ambos del mismo cuerpo legal.

Alega la Defensoría Penal Pública que el tribunal a quo, al momento de valorar la prueba, ha contradicho las reglas de la lógica, particularmente el principio de razón suficiente, respecto de la concurrencia de elementos probatorios que considera para estimar acreditados los hechos de la acusación y la participación del imputado en los mismos. Entiende la defensa que se infringió el aludido principio al momento de explicitarse el razonamiento en virtud del cual el Tribunal condenó a Valdés Vásquez como autor del delito abuso sexual impropio del artículo 366 bis del Código Penal, en particular en su vertiente de corroboración, por cuanto los medios probatorios aportados por el Ministerio Público en el transcurso del juicio oral en su concepto no conducen de manera certera e inequívoca a la ocurrencia de los hechos que se describen en la acusación fiscal.

Precisa la recurrente que se vulneró el principio de razón suficiente al



darse por probado que el acusado incurrió en conductas constitutivas de abuso sexual respecto de la víctima a partir únicamente del relato prestado por esta misma en la audiencia de juicio oral, toda vez que aquél no da cuenta de conducta alguna que pueda configurar el delito indicado. Por otra parte, añade, se afecta el principio de corroboración al pretender dotar de fuerza probatoria a dicho testimonio mediante otros medios de prueba que, sin embargo, tienen como fuente a la misma víctima y que, a mayor abundamiento, resultan del todo insuficientes para efectos de otorgar credibilidad a la declaración prestada por ella en el juicio oral. Se alega que la misma sentencia reconoce que el relato de la menor es escueto y falto de los detalles que se requiere para que se configure la conducta típica del hecho descrito en la acusación, de modo tal que resulta del todo insuficiente, como medio probatorio, para derrotar la presunción de inocencia. Agrega que la falta de suficiencia de este medio para dar por acreditados los hechos pretende ser subsanada por el Tribunal mediante diversas razones que expone y que no son sino meras especulaciones y apreciaciones subjetivas, como lo son el transcurso del tiempo y la ansiedad o la vergüenza que pudiera sentir la menor supuestamente ofendida, que no se encuentran sustentados por ninguna otra prueba que haya sido rendida en juicio. Seguidamente se refiere a los medios probatorios a que alude, específicamente la prueba testimonial y pericial.

Como alegación subsidiaria la defensa invoca la misma causal y reprocha al tribunal haber contradicho los principios de la lógica, particularmente el de razón suficiente, respecto de la concurrencia de elementos probatorios que consideró para dar por acreditados los elementos de la agravante contenida en el artículo 368 del Código Penal. Precisa que el fundamento fáctico de esta circunstancia especial de agravación se sitúa en una hipótesis de prevalimiento, situación que ha de ser buscada por el autor, en el sentido que la actividad de éste debe estar destinada a ponerse conscientemente en la situación de ventaja, hecho que no fue acreditado en el transcurso de la audiencia de juicio oral.

En razón de lo anterior, concluye, al sostener el tribunal que de “las probanzas rendidas en el juicio fluye que el acusado, en virtud de la confianza otorgada, se quedó al cuidado de la víctima, cuestión de la cual se valió a fin



de posicionarse en una situación más ventajosa -el poder estar solo con ésta- para la ejecución del delito, en razón de la existencia de un vínculo -jurídico moral- que lo unía a ésta, quedando así, la menor, en una situación de dependencia respecto de aquél”, vulnera el principio de razón suficiente, toda vez que de los medios probatorios aportados sólo puede concluirse que el condenado se encontraba al cuidado de los menores durante dos horas al día por motivos de la situación laboral de su madre, pero no que dicha circunstancia se produjera debido a una búsqueda de una posición de privilegio de su parte.

Segundo: Que con arreglo a lo dispuesto en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, el juicio y la sentencia serán siempre anulados cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e). De acuerdo a la letra c), la sentencia definitiva contendrá la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297. Esta última norma, finalmente, prescribe en su inciso primero que los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El inciso segundo agrega que el tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Por último, el inciso tercero señala que la valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados y que esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

Tercero: Que la labor del tribunal que conoce del recurso de nulidad por la causal indicada no es en rigor efectuar una nueva valoración de la prueba rendida en el pleito, sino controlar que aquélla que realizaron los miembros del tribunal del juicio se condiga con la norma que les señala a



éstos cómo hacerla, a qué parámetros sujetarse y qué reglas, máximas o tipos de conocimientos no contradecir.

Ese proceso, en el caso de autos, aparece ejecutado satisfaciendo todas estas exigencias, pudiendo afirmarse, en consecuencia, que el tribunal se hizo cargo en su fundamentación de toda la prueba producida y que no obstante apreciarla con libertad, señaló los medios mediante los cuales dio por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que tuvo por probados, permitiendo esta fundamentación la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que arribó.

Cuarto: Que, en efecto, en la extensa sentencia el tribunal a quo analiza latamente la prueba de cargo presentada en la audiencia de juicio oral y expone con precisión y detalle las diversas razones que concurren para considerar que dicha prueba, rendida tanto por el acusador como por la parte querellante, resultó suficiente para estimar demostrado el delito de abuso sexual impropio en carácter de reiterado que se atribuyó al imputado, ajustándose en todo momento a las exigencias previstas en el motivo que antecede.

El fallo se cuida de señalar con detalle y precisión los motivos que lo conducen a tener por establecida tanto la existencia de los hechos materia de la acusación, como la intervención que en ellos cupo al acusado -que se califica de autoría en los términos del N° 1 del artículo 15 del Código Penal- y no es posible encontrar en los fundamentos entregados alguno que pueda estimarse que contradiga la regla de la lógica de razón suficiente como se reprocha en el recurso. La nulidad del juicio y la sentencia no se justifican por una simple o mera discordancia de la Corte con el Tribunal Oral en el valor que se otorgue a la prueba producida en la audiencia de juicio, sino que es menester constatar una contravención a los señalados parámetros del artículo 297, lo que, como se dijo, no se aprecia en la especie, en tanto las explicaciones entregadas por los jueces para dar sustento a la decisión condenatoria resultan plausibles.

La falta de suficiencia que denuncia la parte recurrente no es tal, por cuanto en el fundamento Décimo el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desarrolla 19 puntos en los que expresa los precisos motivos por los cuales asigna poder de persuasión a la prueba rendida y justifica la verosimilitud que



le reconoce. Como antes se dijo, en el caso de autos los sentenciadores entregaron debidamente la justificación que demanda la ley y no se trata en la presente sede de determinarse por esta Corte de nulidad si la prueba convence o no de la acreditación de los hechos -puesto que esa es tarea soberana del Tribunal de Juicio Oral ante el que se rinde esa prueba-, sino de revisar si en ese proceso justificativo se contraviene o no la lógica, cuestión que, se dijo asimismo, no acontece en lo absoluto.

Por tales razones, la nulidad esgrimida habrá de ser desestimada.

Quinto: Que en el recurso se alegó en subsidio que también se configuraban los supuestos de la misma causal de nulidad en relación al establecimiento de los hechos que constituyen la circunstancia de agravación de responsabilidad criminal que la ley contempla para el delito de abuso sexual impropio, consagrada en el artículo 368 del Código Penal.

Pues bien, sin perjuicio de resultar aplicable a este reproche los mismos razonamientos que se han expuesto en los motivos precedentes, lo cierto es que en rigor lo que se plantea en el recurso de nulidad en esta parte dice más bien relación con una errada valoración de los hechos que ha permitido al tribunal subsumirlos en la hipótesis fáctica de la aludida modificatoria. Dicho de otro modo, en rigor la parte recurrente no reprocha la forma en que el tribunal fijó los hechos que después calificó como constitutivos de la agravante, sino que reprocha que los hechos fijados se los haya estimado constitutivos de esa agravante. Ese yerro, de existir, es uno de derecho sustantivo que configura la causal de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal y no la invocada. Lo anterior es suficiente para desatender esta alegación.

Sexto: Que en razón de todo lo antes expuesto y por no satisfacerse los presupuestos de la causal de nulidad contemplada en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, el recurso deducido debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 372 y siguientes del Código Procesal Penal, se **rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa del condenado Francisco Javier Valdés Vásquez, contra la sentencia de veintiséis de abril dos mil veintiuno, pronunciada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo



Penal de Santiago en la causa RIT N° 40-2020, RUC N° 1601113550-5, la que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

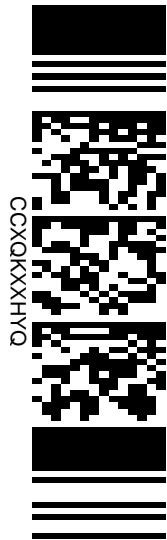
N°Penal-1998-2021

No firman los Ministros señora Jessica González Troncoso y señor Jaime Balmaceda Errázuriz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.



Proveído por el Señor Presidente de la Undécima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a quince de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>